



## Asamblea General

Distr. general  
26 de agosto de 1998  
Español  
Original: inglés

---

**Quincuagésimo tercer período de sesiones**  
Tema 113 b) del programa provisional\*  
**Cuestiones relativas a los derechos humanos:**  
**Cuestiones relativas a los derechos humanos,**  
**incluidos distintos criterios para mejorar el goce**  
**efectivo de los derechos humanos y las libertades**  
**fundamentales**

### **Fortalecimiento del estado de derecho**

#### **Informe del Secretario General**

#### **I. Introducción**

1. En su quincuagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 52/125 de 12 de diciembre de 1997 en la que afirmó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguía siendo el núcleo para coordinar las actividades relacionadas con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en todo el sistema; acogió con beneplácito la profundización del diálogo en curso que inició la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con otros organismos y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a fin de mejorar, en todo el sistema, la coordinación de la asistencia en materia de derechos humanos, democracia y estado de derecho, y alentó a la Alta Comisionada a que continuara ese diálogo teniendo en cuenta la necesidad de estudiar nuevas formas de cooperación con otros órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas, con miras a obtener mayor asistencia financiera para los derechos humanos y el estado de derecho. Al final de la resolución, la Asamblea pidió al Secretario

General que presentara a la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de sesiones sobre la aplicación de la resolución.

#### **II. Asistencia proporcionada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la esfera del fortalecimiento del estado de derecho**

2. De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General 48/141, de 20 de diciembre de 1993, 52/125 y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos es en el sistema de las Naciones Unidas el principal encargado de proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia técnica y financiera con miras a apoyar medidas y programas en la esfera de los derechos

---

\* A/53/150.

humanos, la democracia y el estado de derecho, y para coordinar la asistencia en esta esfera a nivel de todo el sistema.

3. Como se señaló en anteriores informes, el programa de cooperación técnica (que de aquí en adelante se denominará “el programa”) de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se ha desarrollado de manera que pueda responder a las solicitudes de Estados Miembros interesados en fortalecer el estado de derecho y, de este modo, lograr el goce efectivo de los derechos humanos. El contenido del programa sigue centrado principalmente en los elementos que figuran en el marco para el fortalecimiento del estado de derecho, elaborado por el Secretario General en su informe a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período de sesiones, en 1994 (A/49/512, párr. 5).

4. El número de Estados que solicitan asistencia para fortificar y consolidar el estado de derecho es un indicador de la creciente toma de conciencia mundial de su importancia. En 1998 siguió la tendencia de un notable crecimiento del programa que caracterizó el presente decenio, como lo indica otro aumento consecutivo del número de actividades ejecutadas en virtud del programa, que ha crecido de 2 en 1984 a 37 en 1989, 130 en 1994, 215 en 1995, 402 en 1996 y 483 en 1997. El año pasado se llevaron a cabo actividades de apoyo al estado de derecho en más de 50 países y territorios, entre ellos: Albania, Argentina, Armenia, Bangladesh, Belarús, Benin, Bhután, Botswana, Burundi, Camboya, Camerún, Ecuador, El Salvador, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Georgia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Letonia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mongolia, Namibia, Nepal, Palestina, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, República de Moldova, República Unida de Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Togo, Uganda, Viet Nam y Zambia. Estas actividades nacionales fueron complementadas por más de 20 proyectos mundiales y regionales ejecutados en virtud del programa. De este modo, las peticiones por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Miembros siguen siendo altas. Por otra parte, los recursos del programa no han podido mantenerse al mismo nivel que estas peticiones, ya que ni las asignaciones en virtud del presupuesto ordinario ni las contribuciones voluntarias han sido suficientes para cubrir las necesidades de asistencia durante el período que se examina.

### III. Contenido del programa

5. El programa tiene por objetivo ayudar a los gobiernos, que así lo soliciten, a fomentar y proteger los derechos humanos en los planos nacional y regional. En particular se presta asistencia para incorporar las normas internacionales sobre derechos humanos en las leyes, políticas y prácticas nacionales y para crear capacidades nacionales y estructuras regionales para la promoción y protección de todos los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Toda la asistencia proporcionada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en virtud del programa de cooperación técnica se basa en las normas internacionales que figuran en los instrumentos de derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas y en la práctica internacional obtenida al aplicar esas normas en todas las regiones del mundo. Las actividades del programa se llevan a cabo en el contexto de los objetivos de desarrollo nacional y la asistencia coordinada del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de esos objetivos.

6. El programa ofrece actividades muy diversas en la esfera de los derechos humanos a los gobiernos que lo solicitan, incluida la creación y fortalecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos, capacitación en derechos humanos y apoyo a los parlamentos, a la magistratura, a los miembros de la policía y las fuerzas armadas y a los funcionarios de prisiones; asistencia constitucional, reforma legislativa y administración de justicia; los aspectos de derechos humanos desde la perspectiva de elecciones libres y justas, la promoción de la educación en derechos humanos, incluida la elaboración de programas de estudio, y apoyo a las organizaciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil. También se ofrece asesoramiento y asistencia de expertos para cuestiones concretas de derechos humanos, tales como la formulación y la aplicación de planes de acción amplios sobre derechos humanos en el plano nacional y la indemnización a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

### IV. Instituciones nacionales de derechos humanos

7. Los componentes del programa siguen de este modo muy de cerca los elementos del marco de 1994 (véase el párrafo 3) y se basan en el mismo amplio enfoque institucional, en contraste con otros programas en esta esfera, de ámbito más reducido, que tradicionalmente han concentrado sus esfuerzos en la magistratura y elementos concomitantes directos. La inclusión, como centro del programa, de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, tales como las comisiones de derechos humanos y las oficinas del

defensor del pueblo (ibíd., apartado vii) del inciso a) e inciso d) del párrafo 5) constituye un ejemplo. El programa, y sus asociados nacionales, han reconocido hace tiempo el potencial de valiosa contribución de dichas instituciones para el buen funcionamiento del estado de derecho, al complementar con sus conocimientos especializados y su vigilancia constitucionalmente legitimada las funciones cruciales de la magistratura, la legislatura, el poder ejecutivo y las organizaciones no gubernamentales.

8. Las actividades que lleva a cabo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pueden dividirse generalmente en dos esferas: proporcionar asesoramiento y asistencia prácticos a los encargados del establecimiento de nuevas instituciones nacionales o de fortalecer las existentes, y facilitación de reuniones internacionales y regionales de las instituciones nacionales. Por ejemplo, el año pasado la asistencia prestada a dichas reuniones incluyó foros regionales en Asia y África y una conferencia mundial que tuvo lugar el México.

9. Es primordial establecer una base constitucional o legislativa adecuada para toda nueva institución nacional de derechos humanos, ya que es esencial que la institución pueda responder adecuadamente a las necesidades de la comunidad que está llamada a servir. El programa reconoce la importancia de la etapa previa a la institucionalización y por ello proporciona asesoramiento o asistencia preliminar a un gran número de países que están considerando la posibilidad, o que de hecho ya están en el proceso de crear una institución nacional de derechos humanos. Entre los países que recibieron ese tipo de asistencia el año pasado están Armenia, Bangladesh, Camboya, Fiji, Georgia, Liberia, Malawi, Madagascar, Mauricio, Mongolia, Nepal, Papua Nueva Guinea, la República de Moldova, Rwanda, Sri Lanka y Tailandia.

10. También se presta asistencia a las instituciones nacionales recién establecidas. En Sudáfrica, el proyecto de cooperación técnica de la Oficina se centra fundamentalmente en la Comisión de Derechos Humanos. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto sustancial de asistencia técnica a la Oficina de Derechos Humanos de Letonia. El programa envió una misión de evaluación de las necesidades sobre el terreno antes de iniciar un programa general de apoyo para la nueva Comisión de Derechos Humanos de Uganda y posteriormente se ha preparado un proyecto de cooperación técnica en estrecha consulta con la Comisión. También se ha prestado asistencia y asesoramiento a la nueva Comisión de Derechos Humanos de Zambia. Otras instituciones nacionales de Filipinas, la India, Indonesia y Palestina han colaborado con las actividades auspiciadas por la Alta Comisionada.

## V. Metodología del programa

11. Todos los proyectos, incluidos los que están dirigidos a los magistrados, los fiscales, los miembros de la policía o a alguna comisión nacional de derechos humanos, se elaboran en estrecha colaboración con el gobierno solicitante y los organismos de las Naciones Unidas que estén representados en el país de que se trate. La asistencia se puede prestar en forma de expertos, servicios de asesoramiento, cursos de capacitación, cursos prácticos y seminarios, becas, donaciones o el suministro de información y documentación.

12. Dentro de ese marco general, y en respuesta a la solicitud oficial de un gobierno, se aplica una metodología estándar para determinar el contenido concreto del programa para el país de que se trate. La solicitud del gobierno es seguida de un proyecto estructurado en un ciclo de etapas entre las que se destacan: a) evaluación de las necesidades, b) formulación del proyecto, c) ejecución del proyecto, d) supervisión del proyecto, e) evaluación del proyecto y f) seguimiento del proyecto.

13. La evaluación de las necesidades es un estudio de las capacidades, prioridades y necesidades institucionales concretas del país en relación con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Los equipos de evaluación se reúnen con todas las partes interesadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en estrecha cooperación con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, los organismos y programas de las Naciones Unidas y los donantes locales, y reúnen información detallada sobre las políticas, la legislación y las capacidades financieras y humanas existentes en esferas fundamentales. De ese modo, la evaluación de las necesidades permite garantizar una comprensión clara de las prioridades, los objetivos, los programas y los planes de acción del gobierno. El informe resultante proporciona el marco para elaborar posibles actividades de cooperación técnica encaminadas a apoyar los esfuerzos nacionales realizados en esferas determinadas y contribuye a lograr los objetivos nacionales, a garantizar la coordinación con la asistencia existente o prevista de otros donantes, y algunas veces facilita el apoyo adicional de otras fuentes internacionales. Durante el último año se realizaron evaluaciones de ese tipo en el Gabón, Malí y Panamá, entre otros países.

14. Después de la evaluación de las necesidades, generalmente se pide que el programa elabore, en asociación con el gobierno, un documento de proyecto centrado en los problemas que se atenderán mediante la creación de la institución.

En el documento se describe la situación que requiere la elaboración del proyecto y los motivos que justifican el inicio del proyecto; se esboza el plan de lo que se hará, los resultados, el momento en que se plasmarán y quién será el encargado de ello; y se evalúa la situación prevista al concluir el proyecto. El documento de proyecto es también un contrato en que se esbozan las obligaciones de cada asociado en el proyecto; se establecen las bases para la rendición de cuentas, se incluye una guía para la planificación y la ejecución; y se proporciona el marco para la evaluación y los criterios que han de adoptarse para valorar el éxito del proyecto.

15. La formulación del proyecto se lleva a cabo en estrecha consulta con el gobierno y otros asociados (gubernamentales y no gubernamentales) sobre la estructura final del proyecto propuesto, incluidos el análisis y la definición del problema, la definición de la solución deseada, y la estrategia para lograrla. En el proceso también se definen las contribuciones y los arreglos de ejecución más adecuados para obtener los beneficios del proyecto; los riesgos implícitos y la forma de evitarlos; y los recursos financieros que se requieren de la Oficina y del gobierno interesado. Durante el último año se llevaron a cabo misiones de formulación de proyecto en la ex República Yugoslava de Macedonia, la Federación de Rusia, el Gabón, Lesotho, Madagascar, la República Unida de Tanzania, Uganda y países de la ex Yugoslavia.

16. La supervisión se lleva a cabo durante todo el ciclo de los proyectos, lo que incluye algunas veces el envío por la sede de misiones periódicas de supervisión, si se estima apropiado. El objetivo de esas misiones es registrar los avances, garantizar la ejecución eficiente y eficaz del proyecto, detectar los posibles problemas a fin de adaptar consecuentemente las actividades del proyecto y realizar los ajustes que procedan en función de las nuevas necesidades y condiciones no previstas en la etapa de elaboración del diseño. Durante el último año se realizaron misiones de supervisión de proyectos en Armenia, El Salvador, Palestina, Panamá, Papua Nueva Guinea, el Paraguay, la República de Moldova y el Togo.

17. La última etapa del ciclo de un proyecto es la evaluación final del proyecto. Todas las evaluaciones son llevadas a cabo por consultores independientes, quienes evalúan la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las actividades y los resultados del proyecto. Ese proceso garantiza que las lecciones aprendidas se apliquen en la elaboración y ejecución de proyectos posteriores, tanto en el país de que se trate como en otras partes. Durante el último año se llevaron a cabo evaluaciones independientes en relación con proyectos ejecutados en Benin, Guinea Ecuatorial, Mongolia, Polonia y los países de la ex Yugoslavia.

## VI. Ejemplos de países seleccionados

18. Los proyectos de asistencia ejecutados por la Oficina en Burundi y Palestina (Ribera Occidental y Faja de Gaza) ilustran la relación que guarda el contenido de los programas con el estado de derecho. En Burundi, desde 1996 la Oficina del Alto Comisionado ha estado proporcionando apoyo de diversas formas para el fortalecimiento del estado de derecho, incluidos cursos de capacitación para las fuerzas armadas sobre derechos humanos y derecho humanitario; la elaboración de un programa nacional de educación en materia de derechos humanos; el apoyo al fomento de la capacidad de los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales locales para promover los derechos humanos; y el apoyo al fortalecimiento del poder judicial de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. También se está llevando a cabo un trabajo para apoyar la lucha contra la impunidad y promover la reconciliación mediante el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia. El proyecto también apoya la asistencia y la representación jurídica para las víctimas y los presos que comparecen ante el Tribunal de Apelaciones.

19. Desde 1994, la Oficina ha realizado actividades en los territorios ocupados de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza encaminadas a apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina en diversas esferas para la evolución del estado de derecho. Las actividades de apoyo están orientadas a la elaboración de una política nacional que sirva de guía a las actividades de promoción del estado de derecho (incluido un plan nacional de acción); el fortalecimiento de las instituciones del estado de derecho (incluido el desarrollo de las capacidades de los agentes de policía y funcionarios de prisiones palestinos en materia de derechos humanos; la Comisión Palestina Independiente para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, el Consejo Legislativo y las organizaciones no gubernamentales palestinas), y la elaboración y consolidación de las propias leyes palestinas (incluidas las contribuciones para una nueva ley de prisiones, el proyecto de Ley Básica y otras). La Oficina está trabajando a tal fin con instituciones oficiales de la Autoridad Palestina, las organizaciones no gubernamentales palestinas, la magistratura palestina, la Comisión Palestina Independiente para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos y numerosos asociados más.

## VII.

### Aumento de la coordinación en todo el sistema

20. En el contexto del programa de la Alta Comisionada para integrar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en toda la labor del sistema de las Naciones Unidas, su Oficina ha seguido una política de mayor colaboración con otros agentes fundamentales de las Naciones Unidas. En un esfuerzo para salvar la brecha que existe entre el aumento constante de demandas al programa y los recursos limitados que se facilitan para su elaboración y ejecución.

21. En particular, la Oficina ha intensificado el diálogo en curso con otras entidades de las Naciones Unidas mediante consultas bilaterales periódicas y ha participado en los cuatro comités ejecutivos del grupo de coordinación de políticas, integrado por jefes de departamento y funcionarios superiores, que creó el Secretario General para mejorar la coordinación en todo el sistema, incluidas las esferas sustantivas básicas de la paz y la seguridad, los asuntos económicos y sociales, la cooperación para el desarrollo, y el socorro humanitario.

22. Asimismo, en marzo de 1998, la Oficina concluyó un Memorando de Entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre cooperación en la sede y sobre el terreno, y estableció reuniones periódicas para el seguimiento de su aplicación eficaz. Ese nuevo arreglo de cooperación entre la Oficina y el PNUD es probablemente el acontecimiento más importante en esa esfera. En los 33 párrafos del detallado Memorando de Entendimiento se define esa relación cuyo objetivo es aumentar la coordinación, el apoyo mutuo, la eficiencia y la eficacia de los programas respectivos.

23. Resulta un acontecimiento de importancia notable el hecho de que la cooperación entre el programa de las Naciones Unidas que tiene la responsabilidad fundamental de garantizar la asistencia para reforzar la capacidad nacional y para coordinar las actividades de todo el sistema a nivel de los países (el PNUD), por una parte, y la Oficina encargada de promover y proteger los derechos humanos y de garantizar la coordinación de todo el sistema en las cuestiones relacionadas con el estado de derecho y la democracia, por la otra, se establezca en el momento en que las solicitudes de asistencia en relación con el estado de derecho han alcanzado el nivel más alto de todos los tiempos. Esa fusión interna sin precedentes de los recursos de asistencia para el estado de derecho permitirá a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros que tratan de fomentar el estado de derecho programar esa

asistencia de manera más eficiente, eficaz y asequible a nivel de los países.

24. En particular, en el Memorando de Entendimiento se establecen siete nuevos puntos de acuerdo que se relacionan directamente con la asistencia de las Naciones Unidas para fortalecer el estado de derecho: a) cooperación en la elaboración y ejecución de proyectos a nivel de la sede y de los países, y asistencia a los países para la incorporación de esos proyectos en la planificación nacional para el desarrollo; b) intercambio de experiencias en el desarrollo del estado de derecho para apoyar los programas nacionales; c) elaboración de proyectos conjuntos del PNUD y la Oficina en esa esfera; d) apoyo a las organizaciones locales de derechos humanos; e) contribuciones sustantivas de la Oficina en el contexto del componente de gestión pública de la Iniciativa Especial de Gestión Pública en África del PNUD; f) la publicación de un documento de información pública preparado por el PNUD y la Oficina sobre sus actividades conjuntas de cooperación técnica (incluidas las relacionadas con el estado de derecho), y g) consulta y cooperación en la aplicación de las recomendaciones de las distintas cumbres y conferencias mundiales relativas, entre otras cosas, a los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y el estado de derecho.

25. Ya se ha comenzado a aplicar el acuerdo, a lo que ha contribuido el grupo de tareas mixto establecido con ese fin. Actualmente se está ejecutando sobre el terreno un proyecto conjunto particularmente innovador del PNUD y la Oficina, mediante un Asesor Regional de Programas de Derechos Humanos radicado en el África meridional. El Asesor trabaja estrechamente con los gobiernos y los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas en la subregión a fin de asesorar y prestar asistencia a los Estados para el desarrollo de la capacidad nacional en materia de derechos humanos y el estado de derecho.

26. Otro acontecimiento notable se ha producido recientemente a raíz de las conversaciones mantenidas entre la Oficina, el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras entidades con miras a coordinar estrechamente la asistencia en el campo de la administración de la justicia de menores. El resultado de esas conversaciones fueron las detalladas Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal, que el Consejo Económico y Social aprobó en su resolución 1997/30, de 21 de julio de 1997, relativa a la administración de la justicia de menores. En esa resolución, el Consejo invitó al Secretario General a establecer un grupo de coordinación sobre asistencia y asesoramiento técnicos en materia de justicia de menores, con arreglo a lo previsto en las Directrices. El grupo estará integrado por representantes del Centro para la

Prevención Internacional del Delito, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el UNICEF, el PNUD y otras organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas y organizaciones regionales y no gubernamentales interesadas.

27. La Alta Comisionada continúa realizando el análisis a nivel de todo el sistema de la asistencia técnica prestada por las entidades de las Naciones Unidas en esferas relacionadas con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, que, con la cooperación de diversas entidades pertinentes de las Naciones Unidas, espera poder concluir en 1998. El análisis proporcionará los datos objetivos que necesita la Alta Comisionada para determinar las esferas en que existe complementariedad o duplicación, comparar las ventajas competitivas y las esferas de interés de los diversos programas, y explorar de ese modo nuevas modalidades y formas de cooperación para aumentar el apoyo de todo el sistema al estado de derecho.

28. Al mismo tiempo, se han iniciado consultas directas entre la Alta Comisionada y el Banco Mundial, incluso sobre medios para incrementar la cooperación en las iniciativas para el desarrollo del estado de derecho. Las conversaciones sobre el tema celebradas en la sede se complementan con contactos más estrechos sobre el terreno, que es donde se ejecutan los proyectos sobre el estado de derecho.

29. La Oficina del Alto Comisionado también ha adscrito recientemente personal especializado en esa esfera a otras oficinas de las Naciones Unidas con el fin de coordinar la asistencia relativa al estado de derecho. El caso más reciente fue el de un asesor adscrito por la Alta Comisionada a la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados, a fin de que trabajara con éste en la coordinación de un programa de 73 millones de dólares para el desarrollo del estado de derecho, en el que participan 17 donantes y 10 organismos y programas de las Naciones Unidas, así como el Banco Mundial.

30. Todas esas actividades están en marcha y la Alta Comisionada las ha clasificado de prioritarias en sus esfuerzos por mejorar la capacidad de la Organización para apoyar a los Estados que tratan de promover el estado de derecho.

hacia la democracia. Otros factores importantes que pueden determinar la asistencia que presta la Oficina a los Estados Miembros a solicitud de éstos son: las recomendaciones concretas formuladas por los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos; las recomendaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos y sus mecanismos, incluidos los representantes del Secretario General, los Relatores Especiales sobre situaciones o países concretos y los distintos grupos de trabajo; las recomendaciones aprobadas por la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos (establecida de conformidad con la resolución 1987/38 de la Comisión de Derechos Humanos); y las opiniones expresadas por las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

32. La Oficina del Alto Comisionado ha iniciado recientemente un proceso de debate sobre los fines y objetivos de su oficina que deben conformar la base de su programa de trabajo a mediano plazo. La asistencia para apoyar al estado de derecho ocupa un lugar destacado entre esos fines y objetivos, así como la incorporación de los derechos humanos en la labor del sistema de las Naciones Unidas, el fomento de los derechos económicos, sociales y culturales, y la promoción del derecho al desarrollo.

33. No se trata de un conjunto fortuito de objetivos inconexos, sino del fruto natural del reconocimiento creciente dentro de la Organización de que los cuatro objetivos están indisolublemente vinculados. Como se señaló hace medio siglo en el tercer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el régimen de derecho es un elemento vital para la prevención de los conflictos. Además, sigue siendo el garante más eficaz de la realización de todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Se reconoce ampliamente que el estado de derecho es una condición fundamental para el desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, el apoyo al estado de derecho es una cuestión de importancia para todas las dependencias orgánicas que en conjunto integran el sistema de las Naciones Unidas.

## VIII.

### Política y conclusiones

31. La política de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos es asignar prioridad a la prestación de asistencia a los países en desarrollo (particularmente a los países menos adelantados) con especial interés en los países en transición